

Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud  
del deportista y lucha contra el dopaje  
en la actividad deportiva [BOE n.º 148, de 21-VI-2013]

**Dopaje**

La reciente aprobación de la Ley de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva ha supuesto en nuestro ordenamiento jurídico deportivo una inusual y reiterada iniciativa legislativa a la vez que incorpora un régimen verdaderamente excepcional y novedoso con respecto a la hasta entonces vigente en la materia. En efecto, en el Estado, la tradicional monolítica regulación del deporte en una ley *ad hoc*, como la vigente Ley 10/1990, de 10 de octubre, se vio desbordada por la imperativa necesidad de un tratamiento diferenciado y específico en dos ámbitos que constituyen las dos lacras más destructivas del deporte en nuestra sociedad globalmente considerada, como son la violencia y el dopaje. En el primer caso se aprobó la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, derogando el título IX y parcialmente algunos otros preceptos de la Ley 10/1990, y, en el segundo supuesto, la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, ahora precisamente derogada por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio. Ambas materias comparten un denominador común que, de algún modo, justifica este tratamiento diferenciado y propio respecto a la legislación general deportiva, además de constituir, como se ha dicho, la principal amenaza para nuestro deporte, en especial el competitivo de alto nivel y profesional, dadas su lógicas repercusiones mediáticas y sociales, cual es que en las mismas, como es por lo demás consustancial al complejo ordenamiento jurídico transversal del deporte, concurren otros títulos competenciales no menos trascendentes que el fomento del deporte como son el orden público en caso de la violencia y la salud pública en el dopaje.

Si la aprobación de la Ley Orgánica 7/2006 supuso una definitiva y decidida intervención del Estado contra el dopaje en el deporte, con sustantivas y novedosas previsiones, superando con ello la previa y escasísima regulación limitada, en lo que a la disciplina deportiva se refiere, a sólo algunos tipos infractores que, miméticamente, contemplaban también las Comunidades Autónomas en sus respectivas leyes del deporte y normativa de desarrollo cuando no a una mera remisión de la previsión estatal, pronto la promulgación legal quedó condicionada por su criticada falta de adecuación al Código Mundial Antidopaje (CMA), su cuestionada eficacia a la vista de los conocidos escándalos de casos de dopaje en el deporte español y su impacto en el ámbito internacional; la supeditación de su requerida reforma en orden a la presentación de las candidaturas de Madrid a organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos o algunas sonadas deficiencias y sus consecuencias en el funcionamiento de órganos dependientes del Consejo Superior de Deportes, entre otras causas, determinaron

el acometimiento de un nuevo texto legal cuyo rasgo más destacable, al margen de las novedades organizativas y sustantivas del régimen jurídico que contempla como seguidamente se mencionarán, es el de constituir una transposición del referido CMA, lo que ha llevado ya a no pocos e insignes autores a una crítica de esta «huida hacia adelante» que ha provocado, en algunos aspectos destacados, una ruptura con determinadas garantías y principios tradicionales y fundamentales del Derecho español en general y sancionador en particular.

Con una extensión en su articulado sensiblemente superior a la precedente (63 preceptos frente a 49), la nueva Ley Orgánica pretende abarcar en su ámbito de aplicación a la práctica deportiva general y no sólo a la competitiva u organizada de alto nivel y profesional, quedando esta última aquietada principalmente por la licencia deportiva.

Así, en el ámbito subjetivo, la Ley se extiende a los deportistas con licencia estatal o autonómica homologada, como también los que lo hubieran estado con carácter previo, dejando al margen por tanto a aquellos deportistas con licencia exclusivamente autonómica cuyo ámbito competencial en materia de dopaje sigue residenciado en la respectiva Comunidad Autónoma, en concordancia con el ámbito objetivo de aplicación que se limita a las competiciones deportivas oficiales, de ámbito estatal. Destaca también en el ámbito subjetivo comentado que estarán sometidos los deportistas calificados como de nivel internacional o que participen en competiciones de ámbito internacional que alcanzaría a realizarles controles por parte de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPDS) cuando se encuentren en España, si bien, a modo de competencia concurrente, sólo se encuentran sujetos a las normas y procedimientos de la Federación internacional correspondiente y de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), incluyendo los referentes al pasaporte biológico, lo que implica que tampoco podrán ser sancionados por la AEPDS. Junto al fuero personal de los deportistas se somete también lo que la Ley denomina «su entorno», es decir, a los técnicos, jueces, árbitros, demás personas con licencia deportiva, médicos y demás personal sanitario, directivos, dirigentes o personal de Federaciones deportivas españolas, de Ligas profesionales, de entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, clubes o equipos deportivos.

Es en la organización administrativa donde se ha producido un destacado cambio con la creación, por una parte, de la AEPDS (antigua Agencia Estatal Antidopaje) que se erige ahora en el único órgano público con competencias en la materia, centralizando las políticas estatales de protección de la salud en el deporte y de lucha contra el dopaje y de investigación en ciencias del deporte, y, por otra, del Tribunal Administrativo del Deporte, asumiendo conjuntamente las competencias que hasta ahora ostentaban el Comité Español de Disciplina Deportiva y la Junta de Garantías Electorales, conociendo a través del recurso administrativo especial de la revisión de las sanciones en materia de dopaje impuestas por la AEPDS, concediéndose un amplia legitimación activa que incluye a la AMA y al COI.

Otra de las cuestiones novedosas y no menos controvertidas es el régimen de la programación y realización de los controles de dopaje que determina exclusivamente la AEPSD aunque, también, las Federaciones deportivas españolas en determinados casos, que podrán ser por sorpresa o previa citación, exigiéndose a deportistas, entrenadores, equipos, clubes y directivos suministrar los datos de localización habitual de los deportistas que se custodiarán en un fichero de la AEPSD que podrá ceder los datos a la AMA, así como la obligación de éstos, médicos y demás personal sanitario incluido el entorno del deportista de indicar los tratamientos médicos a que estén sometidos los deportistas, sus responsables y alcance. Pero tales controles también pueden ser llevados a efecto, incluidos a deportistas españoles, por parte del COI y las Federaciones deportivas internacionales (o españolas si delegan en éstas) en los casos de competiciones internacionales celebradas en España, lo que implica también que el ejercicio de la potestad disciplinaria sea conforme a su propia normativa. Por su parte, se prevé que la AEPSD pueda realizar controles de dopaje en competiciones internacionales celebradas en España si la federación internacional no ordena la realización de controles, e, incluso, a deportistas sujetos a la Ley que se encuentren en el extranjero a través de agentes habilitados por la AEPSD previa autorización de las autoridades nacionales antidopaje. Respecto a las garantías en la realización de estos controles, en los supuestos de extracción de sangre, se habilita además del médico a un facultativo especialista en análisis clínicos u otro tipo de personal sanitario cuyo título otorgue dicha competencia, bastando para el resto de los controles referidos a otros parámetros biológicos que se haga cargo cualquier personal debidamente autorizado por la AEPSD. Como principal obligación accesoria por parte de clubes, organizaciones, grupos y entidades deportivas (también las Federaciones españolas cuando los deportistas forman parte de las selecciones deportivas o en deportes individuales) es la de llevar un libro, registrado por la AEPSD, en el que consten todos los tratamientos médicos y sanitarios que hayan prescrito sus facultativos a los deportistas bajo su dirección, siempre que éstos lo autoricen. En este orden, los deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal pueden solicitar una autorización de uso terapéutico al Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico, dependiente de la AEPSD, debiendo quedar registradas en ésta para su validez. Es de destacar igualmente que los análisis destinados a la detección de sustancias y métodos prohibidos en el deporte deben realizarse en laboratorios con acreditación internacional de la AMA u homologados por el Estado.

El régimen sancionador es la materia más extensa de la Ley, con una inequívoca finalidad de ajuste a lo establecido en el CMA a pesar de las dificultades que tal adaptación conlleva. Son las más relevantes, respecto a la regulación anterior, la clarificación del alcance de la responsabilidad del deportista y su entorno; la compleja y casuística adecuación de las sanciones previstas según las infracciones muy graves (incluye la inhabilitación de por vida para obtener la licencia o multas de hasta 400.000 euros) y

graves cometidas, sus circunstancias y responsables; la introducción de medidas ciertamente discutibles como la suspensión provisional de la licencia por la constatación de un resultado analítico adverso o, también, la posibilidad de anular los resultados de las competiciones incluso en supuestos en que la conducta descrita en el tipo infractor no vaya a llevar aparejada la correspondiente sanción; la mejora en la descripción de las circunstancias atenuantes y agravantes, con especial consideración a la reincidencia de infracciones y su configuración, así como la colaboración en la detección de una infracción de las normas antidopaje a los efectos de reducir el tiempo de la sanción de suspensión de la licencia; la implantación del sistema de reconocimiento mutuo de resoluciones sancionadoras de otros Estados, Federaciones o entidades internacionales; el novedoso sistema de colaboración con las autoridades judiciales, en el que el principio *non bis in idem* y la preferencia de la jurisdicción penal son reconsiderados en los supuestos de identidad de fundamento entre el tipo penal y el sancionador administrativo; la extensa prescripción de las infracciones, sean muy graves o graves, a los 8 años; y la competencia única que se concede a la AEPSP en el ejercicio de la potestad disciplinaria en materia de dopaje, tanto en su incoación, instrucción como resolución, rompiendo con ello la dualidad compartida existente hasta el momento con las Federaciones deportivas españolas.

Constituyendo la Ley, como expresamente se resalta en su preámbulo, un sistema de protección de la salud que configura el dopaje de manera integral, se regulan seguidamente una serie de medidas al respecto, como la implantación de reconocimientos médicos previos a la expedición de la licencia, la creación de la tarjeta de salud de los deportistas de alto nivel o profesionales, el tratamiento de datos relativos al dopaje, así como ya en su título III y último el establecimiento de un control y supervisión de productos, medicamentos y complementos nutricionales, sus condiciones de comercialización y utilización, así como la imposición de sanciones a la participación de profesionales sanitarios y cualesquiera otros profesionales que fabriquen, preparen, faciliten, colaboren, prescriban o dispensen sustancias y productos susceptibles de producir dopaje en la actividad deportiva.

SANTIAGO PRADOS PRADOS  
*Letrado del Cuerpo Jurídico Militar*